

**Ces.14.870.115**

**Señor(a)**  
**JUEZ ADMINISTRATIVO DE BUGA**  
**(REPARTO)**

**MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

**DONALDO ROLDAN MONROY**, mayor de edad, abogado en ejercicio, domiciliado en la ciudad de Bogotá D. C., identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación **de JORGE ENRIQUE BARBOSA COLORADO**, persona mayor de edad, domiciliado(a) y residente **en Buga**, de condiciones civiles consignadas en el **poder adjunto** al presente escrito, con todo respeto me dirijo a ustedes, para que en virtud al Medio de Control establecido en la Ley 1437 de 2011, el Título III, Artículo 138 se trámite como Nulidad con Restablecimiento del Derecho para lo cual formulo demanda contra la **NACION** (Ministerio de Educación Nacional) y **FIDUPREVISORA, S. A.**, personas jurídicas de derecho público, domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., representadas por la señor (a) **MINISTRO (A) DE EDUCACION NACIONAL y PRESIDENTE de Fiduciaria**, quien lo sea o haga sus veces, o por el apoderado especial que para tal efecto se designe en el momento de la notificación, a fin que previos los trámites procesales previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y normas complementarias, existentes o que se expidan se declare el Restablecimiento del Derecho de carácter Laboral y mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada se provea favorablemente a las pretensiones de la presente demanda.

**I. PARTES**

Demandante:	<b>JORGE ENRIQUE BARBOSA COLORADO</b> <b>C. C. 14.870.115</b>
Apoderado Judicial	<b>DONALDO ROLDAN MONROY</b> C. C. 79.052.697 de Bogotá, D. C., T. P. 71.324 del C. S. de la J.
Demandados:	<b>NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FIDUPREVISORA, S. A.</b>
Representante Legal:	Ministro (a) de Educación Nacional y Presidente Fiduciaria o quien haga sus Veces
Interviniente	Agente del Ministerio Público Delegado ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Buga.

## II. DECLARACIONES Y CONDENAS

- 2.1. **Declarar** la nulidad de la Resolución No. SEM 1900 – 0673 del **17 de agosto de 2016**, expedido por Secretaria de Educación del Municipio de Guadalajara de Buga, que niega el reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria, por el no pago oportuno de la Cesantía Definitiva, al docente **JORGE ENRIQUE BARBOSA COLORADO**.
- 2.2. **Declarar** que la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional (Secretaría de Educación del Municipio de Guadalajara de Buga) y/o FIDUPREVISORA, S. A., debe reconocer y pagar la Indemnización Moratoria, por el pago tardío de la Cesantía Definitiva que le fue reconocida con la **Resolución No. 1902-316 del 08 de abril de 2014** a **JORGE ENRIQUE BARBOSA COLORADO**, identificado con cedula **14.870.115**, a razón de un día de salario por cada día de retardo, **desde el 04 de febrero de 2014 y hasta el 1 de julio de 2014** (fecha de pago de dicha prestación), equivalente a la suma de **\$15.026.599.70**, de conformidad con la Ley 1071 de 2006, artículo 5º Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes y complementarias, valor que deberá indexarse para el día del pago.
- 2.3. **Ordenar** a las entidades demandadas a que den cumplimiento a lo dispuesto en el fallo, dentro del término perentorio señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.
- 2.4. **Condenar** a las entidades demandadas a que sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se incorporen los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor, o al por mayor, como lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A.
- 2.5. **Condenar** a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, sobre las sumas adeudadas a mi mandante, conforme a lo normado en el artículo 192 del C.P.A.C.A. (adicionado por la Ley 446 de 1998).
- 2.6. **Condenar** en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas

## III. HECHOS Y ANTECEDENTES

Son fundamentos de la acción incoada en la presente demanda los siguientes:

- 3.1. Mediante Petición radicada bajo el No. **2013-CES-040082 del 29 de octubre de 2013**, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Buga, el señor **JORGE ENRIQUE BARBOSA COLORADO**, solicitó el reconocimiento y pago de la Cesantía Definitiva.
- 3.2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Buga, mediante **Resolución 1902 – 316 del 08 de Abril de 2014**, reconoció la

Cesantía Definitiva, por un valor de **JORGE ENRIQUE BARBOSA COLORADO (\$14.180.163.00 m/l)**.

- 3.3. Los sesenta (65) días para el reconocimiento y pago de la Cesantía Parcial, vencieron el **04 de febrero de 2014**, sin que para esa fecha se le hubiera pagado dicha prestación económica.
- 3.4. El pago debería haberse realizado, a más tardar, el **04 de febrero de 2014**.
- 3.5. El pago se realizó de manera tardía, por medio del Banco BBVA, el **1 de julio de 2014**.
- 3.6. Mediante solicitud radicada en Julio de 2016, se solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Buga., el pago de la indemnización moratoria.
- 3.7. Mediante **Resolución No. SEM 1900 – 0673 de fecha 17 de agosto de 2016**, expedido por la Secretaria de Educación Municipal de Guadalajara de Buga., niega el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por el pago extemporáneo de las Cesantías Definitivas.
- 3.8. Se radicó solicitud de conciliación prejudicial, ante la Procuraduría, el día **01 de febrero de 2017**.
- 3.9. El día **06 de marzo de 2017**, se realizó Audiencia de Conciliación Prejudicial, en la cual no se obtuvo ningún acuerdo conciliatorio.
- 3.10. Por demandarse un Acto Administrativo Ficto o Presunto, se puede hacer en cualquier tiempo.
- 3.11. La parte demandante, me confirió poder para actuar

#### **IV. NORMAS VIOLADAS**

**1. Constitución Política de Colombia**, Artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13º, 23º, 25º, 53º, 58º, 228º y 336º.

El Artículo 1º de la Carta Fundamental prescribe que nuestro País, está organizado como un ESTADO SOCIAL DE DERECHO que obliga a **las autoridades a adelantar sus actuaciones dentro de los términos establecidos en la Constitución y la Ley**. Por lo tanto al no haber cumplido los términos de la Ley 244 de 1995, nace el derecho para el administrado al reconocimiento y pago de la indemnización allí contemplada.

El Artículo 2º de la C. P. fue desconocido por la Entidad demandada porque uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la “efectividad de los derechos consagrados en la Constitución” y uno de ellos es el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales.

Los funcionarios públicos deben tratar a toda persona sin discriminación alguna, porque ello constituye la razón de ser de un Estado; en este sentido el respeto de los derechos inalienables debe inspirar todas las actuaciones del Estado conforme al artículo 5º de la C. P., el cual también se violentó al negar la indemnización moratoria, reclamada por mi poderdante.

El artículo 6º de la Carta enseña que los Servidores Públicos son responsables

antes las autoridades por infringir la ley, por omisión o por extralimitación de funciones. Existe una obligación de las Autoridades Administrativas para poner en acción lo necesario con el objeto de que los derechos de los ciudadanos se reconozcan y paguen, como en el presente caso, que al producir el acto Administrativo demandado, se dio todo lo contrario en abierta oposición al citado Artículo 6°.

Nuestra Constitución, establece como Principio Mínimo Laboral, el mantener los salarios y prestaciones, sin que ellos puedan ser afectados.

Dispone ésta norma de manera imperativa:

“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (...) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; (...) **La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.**”( se resalta)

Se consagran acá el principio de rango constitucional en materia laboral sobre la Aplicación de la situación más favorable.

El proceder ilegal de la Administración no ha permitido que a mi mandante se le garantice el derecho al pago oportuno de su cesantía definitiva, al haber incurrido en mora en el pago y no negársele el Derecho a la indemnización contemplada en la ley 244, transgrediendo el artículo 53 de la Carta.

El artículo 58 en concordancia con el Artículo 336 de la C. P. son igualmente vulnerados por el Acto Administrativo atacado, en tanto desconoce los derechos adquiridos de los docentes consagrados en la Ley 244 de 1995.

## **2. Norma legalmente Aplicada**

Ley 1071 de 2006.

Se dejó de aplicar lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, que indica:

*“Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.*

**Parágrafo.** *En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.*

*Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.*

**Artículo 5°.** *Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme*

17

*el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.*

**Parágrafo.** *En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.”*

### **3. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN.**

#### **3.1 Entidad Competente Petición.**

La petición de mi apoderado (a), fue presentada ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Boyacá

Según la Ley 115 de 1994, artículo 180, la entidad que debe reconocer las prestaciones de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es la Nación, por intermedio del Ministerio de Educación Nacional:

“RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones sociales.”

La parte actora, estaba y está vinculada como Docente en la ciudad de Boyacá.

Ésta función la delegó el Ministerio de Educación Nacional a los Secretarios de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, según la Ley 962 de 2005, artículo 56 y el Decreto 2831 de 2005.

### **4. INCOMPETENCIA DE FIDUPREVISORA**

La Entidad demandada, en reiteradas oportunidades, remite éste tipo de solicitud a Fiduprevisora, S. A., alegando que como dicha Entidad es la diputada para el pago, entonces debe responder éstas solicitudes.

Sin embargo, no existe ninguna norma que delegue dicha función en Fiduprevisora, S. A., como si en cambio, existe para la Nación – Ministerio de Educación Nacional (Ley 115/94, art. 180), quien a su vez lo delega en las Secretarías de Educación (Ley 962/2005, artículo 56 y Dec. 2831/2005).

Adicionalmente, cuando Fiduprevisora, S. A., responde éstas solicitudes, expresamente indica:

*“Esta comunicación no tiene carácter de acto administrativo por cuanto la Fiduprevisora S.A., no tiene competencia para expedirlos solo obra en calidad de administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales*

*del Magisterio y es emitida por Fiduprevisora S.A., única y exclusivamente, como vocera y administradora del Patrimonio de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.*

## **5. CARGO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO.**

El Acto Administrativo acusado es ilegal por Infracción manifiesta de la Constitución Política de Colombia, artículo 13, Principio de Igualdad; artículo 53; del Principio de la Favorabilidad; de la Ley 244 de 1995, artículo 2º, parágrafo y; Decretos 3135 de 1968, artículo 41 y Decreto 1848 de 1969, artículo 102, de conformidad con lo explicado en el Capítulo Concepto de Violación y de manera especial viola lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, artículos 4º y 5º

## **6. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.**

La indemnización por el pago de las cesantías, es un asunto decantando con suficiencia por el H. Consejo de Estado, quien en Sentencia del 12 de diciembre de 2002, con ponencia del H. Consejero Jesús María Lemos Bustamante, Radicado 1604-01, manifestó:

### **“5.4. El análisis de la Sala**

El Tribunal de primera instancia negó las súplicas de la demanda argumentando que la demandante debió agotar la vía gubernativa respecto de la Resolución No.0776 del 17 de abril de 1998, por cuanto con dicho acto administrativo se le negó el derecho a la indemnización por mora en el pago de las cesantías definitivas; Agregó que dicha resolución debió ser el acto atacado pues para la fecha de expedición de la misma la accionante sabía de la mora en que había incurrido la Administración.

#### **5.4.1. La indemnización por mora en el pago de las Cesantías Definitivas**

Los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 establecieron un procedimiento con términos precisos y perentorios para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos, con el fin de precaver la mora de la administración pública en el cumplimiento de dicha prestación social. Este conjunto normativo se complementó con el parágrafo del artículo 2, mencionado, según el cual cuando la Administración no cumple con los referidos términos indicados en el procedimiento administrativo especial mencionado, el servidor público afectado tiene derecho a reclamar una indemnización equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías aludidas.

*“DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXI. N. 42171. 29, DICIEMBRE, 1995. PAG.13  
Ley 244 del 29 de diciembre de 1995*

*por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.*

*El Congreso de Colombia  
DECRETA:*

*Artículo 1º. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de*

*los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.*

*Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al petionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.*

*Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.*

*Artículo 2°. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.*

*Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual sólo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.*

*(...)"*.

La jurisprudencia del Consejo de Estado<sup>1</sup>, por su parte, ha precisado la fecha a partir de la cual se debe contar la indemnización por mora en el pago de las cesantías definitivas:

*"(...) conforme al artículo 1 de la ley 244 de 1995 las entidades dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de Cesantías Definitivas, están obligadas a expedir la respectiva resolución y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la misma ley tienen un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo para cancelar la prestación. En este caso el demandante solicita que se declare el silencio administrativo negativo frente a su petición del 9 de marzo de 1999 es decir que esta es la fecha que puede tomarse para efecto de contabilizar la aplicación de los artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995. Así entonces, si los 15 días hábiles para la expedición del acto de liquidación se cumplieron el 31 de marzo de 1999 y los 45 días hábiles con los que contaba la entidad para pagar la prestación se cumplieron el 8 de junio de 1999, la sanción de que trata el artículo 2 de la mencionada ley se aplicará sólo a partir de esta última fecha y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Así entonces, resulta acertado ordenar que el valor al que por concepto de cesantías definitivas e intereses tenga derecho el demandante sea actualizado atendiendo el índice de precios al consumidor, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 1997 y hasta el 8 de junio de 1999, momento a partir del cual tiene derecho al reconocimiento de sanción por mora, en las condiciones antes precisadas."*

De acuerdo con lo anterior, los términos deben aplicarse de manera que se contabilice un total de sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la petición, siempre que se cumplan las condiciones y se aporte la documentación requerida para acceder al pago de las cesantías definitivas.

### **5.4.3. El caso concreto**

Si bien la demandante presentó petición de liquidación de sus cesantías definitivas ante la Dirección Seccional de Administración Judicial el 15 de abril

<sup>1</sup> Sentencia del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2000, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", consejero ponente Alberto Arango Mantilla, actor José Ever Rodríguez Barrero, Radicado : 2020-00

de 1997, deberá tomarse en consideración el 1 de julio de 1997, toda vez que en dicha fecha se desvinculó del servicio y antes de la misma no podía surgir derecho a reclamar la prestación social mencionada, instituida para atender las necesidades del empleado a partir del momento en que cesa en sus funciones (Fl. 9).

En vista de que a la solicitud no fueron acompañados los documentos requeridos para adelantar la diligencia, la Dirección Seccional de Administración Judicial solicitó los mismos a la peticionaria, hoy demandante, por oficio del 7 de julio de 1997 (Fl.47).

Como el 10 de julio de 1997 la demandante radicó un escrito en el que allegaba las certificaciones pedidas, desde esa fecha deben computarse los términos a los que alude la Ley 244 de 1995, esto es, quince (15) días hábiles para “expedir la Resolución correspondiente” de liquidación de las cesantías definitivas, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha en la cual haya quedado en firme dicha Resolución, para efectuar el pago de la prestación social. Esto implica que deben contabilizarse un total de sesenta (60) días hábiles a partir de la petición más el término de ejecutoria de la resolución correspondiente (así lo indica el artículo 2 de la Ley 244 de 1995), en este caso la 0776 del 17 de abril de 1998 que tuvo un término de ejecutoria de cinco (5) días hábiles, para un gran total de sesenta y cinco (65) días hábiles (Fls. 11, 27 y 5 del cuaderno No.2).

En estas condiciones, deben contarse sesenta y cinco (65) días hábiles desde el 10 de julio de 1997 para determinar la fecha a partir de la cual se incurrió en mora por parte de la entidad, lo cual significa que el pago de las cesantías definitivas debió realizarse a más tardar el 14 de octubre de 1997, con lo que resulta evidente que la Administración incurrió en mora si se toma en cuenta que el pago de la prestación social se efectuó el 17 de abril de 1998, según lo acepta la demandante (Fl. 4).

En conclusión, la sanción a la que se refiere el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995 por mora en el pago de las cesantías definitivas consistente en “un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago” deberá contabilizarse entre el 14 de octubre de 1997 y el 17 de abril de 1998.

Así mismo, de conformidad con la tesis acogida por la Sala en cuanto a la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del C.C.A. (indexación), se pronunciará la sentencia en tal sentido, habida consideración de que se trata de un factor de equidad, en virtud del cual se conserva la capacidad adquisitiva de esas sumas, por manera que lo contrario implicaría un desmedro o empobrecimiento para la actora, y consecuentemente, un enriquecimiento sin causa para el organismo oficial.

Ahora bien, para liquidar dicha indexación la entidad demandada deberá aplicar la fórmula que se señalará en la parte resolutive de esta providencia de manera escalonada, es decir, que el mes más antiguo tendrá una actualización mayor a la de los subsiguientes, y el más reciente una menor, y como es lógico, ejecutando una operación aritmética similar en relación con cada aumento o reajuste salarial. O sea que para ello deberá tomar en cuenta los aumentos o reajustes reconocidos o decretados periódicamente, para deducir la indexación que afecta las sumas causadas mes por mes.



Finalmente, la Sala desestima la tesis según la cual la Administración no incurrió en mora por cuanto el pago se efectuó el mismo día de la expedición de la Resolución 0776 del 17 de abril de 1998 por la cual se ordenó el pago pues para dicha fecha la Dirección Seccional de Administración Judicial había retardado ya varios meses el pago de las cesantías definitivas, excediendo con creces los términos de la Ley 244 de 1995, que no deben apreciarse por separado sino en su conjunto (quince (15) días + cuarenta y cinco (45) días + el término de ejecutoria de la resolución que ordena el pago), pues de no ser así la Administración podría dilatar indefinidamente la fecha de expedición de la resolución que dispone el desembolso de las cesantías definitivas, burlando con ello el propósito de la Ley.

### 1. Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **FALLA**

**REVOCASE** la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, Cesar y Norte de Santander, Sala de Descongestión, del 31 de octubre de 2000, que declaró probada la excepción propuesta por la entidad demandada. En su lugar se dispone:

**CONDENASE** a la entidad demandada al pago, en favor de la demandante BEATRIZ CUBEROS DE CORONEL, identificado con cédula de ciudadanía No.27'585.315 de Cúcuta, de una indemnización equivalente a un día de salario por cada día comprendido entre el 14 de octubre de 1997 y el 17 de abril de 1998, por mora en el pago oportuno de las cesantías definitivas en los términos de la Ley 244 de 1995.

De igual modo, se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del C. C. A., dando aplicación a la siguiente fórmula:

$$R = R.H. \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En la que el valor presente ( R ) se determina multiplicando el valor histórico ( R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de la indemnización por mora en el pago de las cesantías definitivas desde el diez y siete (17) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998) hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia."

### **7. REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN**

Dispone el Código Contencioso Administrativo, (Art. 146), que en los procesos que se adelanten contra la Nación, como en el presente caso, estará representada por el Ministro o por la persona de mayor jerarquía de la Entidad.

Se tiene, en conclusión, que la Nación (Representada por el Ministerio de Educación Nacional, quien tiene bajo su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), es la única entidad, con legitimación para comparecer como demanda y contra quien la parte actora, me otorgó poder.

## 8. CADUCIDAD DE LA ACCION

La demanda se puede presentar en cualquier tiempo ya que estamos frente a una prestación periódica y adicional se presenta el silencio Administrativo por no obtener una respuesta de fondo, clara, concisa y concreta como no lo exige la Ley y lo ratifica la Sentencia T-377 de 2000, de la H. Corte Constitucional, entre otras frente al requerimiento de la Indemnización moratoria.

El Juzgado 12 Administrativo de Descongestión de Bogotá con sentencia del 12 de agosto de 2011 se pronunció frente a la caducidad de la acción de Nulidad Restablecimiento del Derecho así:

*“Respecto de la excepción de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho a que hacer referencia la apoderada del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto la demanda no se ajusta a los presupuestos del artículo 136 numeral 2 del C.C.A se encuentra que claramente señala que en tratándose de prestaciones periódicas como la del Sub Lite, la demanda puede proponerse en cualquier tiempo, pues si bien los actos administrativos demandados fueron expedidos por las entidades accionadas en el año 2009 y la demanda se interpuso en el 2010, la controversia que esta lleva se refiere a la omisión del pago de la sanción dispuesta por la ley respecto del no pago oportuno de las prestaciones sociales a favor del petente, las cuales se generan continuamente, sin descontar el hecho de que no hay constancia de notificación o comunicación de los actos acusados, razón por la cual no hay lugar a declarar probado éste medio exceptivo.(sic)*

## V. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA Y PROCEDENCIA DE LA ACCION

En lo relativo al presupuesto procesal de la acción contenciosa administrativa, como lo es el agotamiento previo de la vía gubernativa, debe observarse que la misma se encuentra agotada en los términos del inciso final del artículo 76 y del artículo 87 del C.P.A.C.A., en cuanto disponen que:

ART. 76.- “... Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.”

ART. 87: “Los actos administrativos quedarán en firme:

(...)

3. Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o si se hubiere renunciado expresamente a ellos.”

Siendo ello así es dable entrar a reclamar la declaratoria de Nulidad de la Resolución demandada y su consecuencial Restablecimiento del Derecho, toda vez que ha quebrantado el ordenamiento Administrativo, que amparaba una situación jurídica subjetiva.

**VI. P R U E B A S**

- 6.1. Se allegan con la demanda, los que reposan en poder de mi representado (a), solicitando respetuosamente se de aplicación a lo dispuesto en el C. P. A. y C. A., artículo 215, en concordancia con el CGP, artículos 245 y 246:
- 6.1.1. Cédula de ciudadanía de la parte actora.
- 6.1.2. Resolución **SEM 1900-0673 del 17/08/2016 con la Constancia de Notificación de fecha 11 de octubre de 2016 en 3 (fls).**
- 6.1.3. Recibo de pago expedido por el Banco BBVA **1 de julio de 2014 en 1(fl).**
- 6.1.4. Copia de la Resolución No. 1902-316 del 08/04/2014.
- 6.1.5. Original Constancia del Acta de Conciliación 1(fl) anverso.

**VII. A N E X O S.**

- 1. Los relacionados en el acápite de pruebas
- 2. Poder legalmente conferido para la presente actuación.
- 3. **Cuatro (4)** copias de la demanda y sus anexos para sus correspondientes traslados a la Entidad Demandada, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado.
- 4. Dos Copias de la demanda para el Archivo del Juzgado.
- 5. Disco compacto con el archivo digital de la demanda y sus anexos.

**VIII. JURAMENTO ESTIMATORIO**

De conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso, artículo 206, por remisión expresa del C.P.A.C.A., artículo 306, me permito establecer bajo la *gravedad de juramento*, la estimación razonada de la cuantía, frente al derecho que se pretende, teniendo en cuenta que mi representado devengaba mensualmente para el año 2013, una asignación mensual: **\$3.066.653.00**, el monto de la indemnización moratoria es de QUINCE MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS con setenta centavos (\$15.026.599.70).

**IX. COMPETENCIA Y CUANTÍA**

Se establece en relación con el derecho pretendido y teniendo en cuenta que mi representado devengaba un salario para el año 2013 de: **\$3.066.653.00**, el monto de la indemnización moratoria, se indica a continuación, más la indexación y los intereses respectivos:

AÑO	SALARIO	VALOR X DIA	DIAS DE MORA	INDEMNIZACIÓN MORATORIA
2013	\$ 3.066.653,00	\$ 102.221,77	147	\$ 15.026.599,70

**X. DOMICILIO PROCESAL Y NOTIFICACIONES**

**De las Entidades demandadas:**

- 1. La **NACION** (Ministerio de Educación Nacional), en la Calle 43 No.

57 – 14 C.A.N en la ciudad de Bogotá, D.C.,  
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.

2. A la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A**, en la ciudad de Bogotá D.C.,  
Calle 72 No. 10 – 03, Pisos 4 y 5, notjudicial@fiduprevisora.com.

3. **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO:** Calle  
70 No.4-60, 2558955 Extensiones 406, 407, 408 y 409,  
mesaayuda@defensajuridica.gov.co

3.1. **La Demandante:** En Buga, carrera 23 A No. 1 PN – 02,  
jobaco4@hotmail.com.

3.2. **El Suscrito:** En Bogotá, D. C., Carrera 7 # 16 – 56, Oficina  
704, 7037494, info@roldanbogados.com

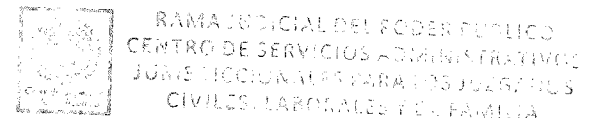
Del Señor Juez,

  
**DONALDO ROLDAN MONROY**

C. C. No. 79.052.697 de Bogotá

T. P. No. 95.908 del C. S. de la J.

Elab/smog



*Donaldo Roldan Monroy*  
El documento fue recibido en el Centro de Atención al Ciudadano por  
Quien se identifica con C. C. No. 79.052.697  
T. P. No. 95.908 del C. S. de la J. Bogotá, D. C. 03 MAR. 2017

Responsable Centro de Servicios

*Maria Paula Cardona Roldan*  
Maria Paula Cardona Roldan